

**PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS Y
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y PROVIDENCIAS JUDICIALES**

CRISTIAN HELÍ CASANOVA PARADA
JESUS FABIAN MAURICIO HERRERA NAVARRO
EDDER ALWEY VILLAMIZAR VACCA

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA

RESUMEN

En el año 1991, se cambió el enfoque del derecho en Colombia, pues empezó el estado a consolidarse como un Estado Social y Democrático de Derecho, dejando atrás lo insípido de los sistemas de corte dictatorial e inquisitivo, dando paso a una nueva generación de garantías constitucionales, que propenden por excelencia en la protección de derechos fundamentales, al máximo exponente de dejar sin efectos decisiones que van en contraria sintonía a los derechos fundamentales consagrados en la carta política de 1991, que acoge lo dispuesto por la declaración de derechos humanos.

Es loable, destacar el gran acierto de la asamblea nacional constituye, al implementar la figura señalada en el artículo 8 (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) creando con esto la acción de tutela como mandato constitucional (CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, ART 86, 1991).

Destacamos como lo hizo el legislador primario que la acción de tutela, es un mecanismo constitucional que permite la garantía efectiva de los derechos fundamentales de las personas. Esta acción pública en su decreto reglamentario (Decreto Reglamentario de la Acción de TUTELA 2591, 1991) como norma primigenia señalaba que resultaba procedente contra providencias judiciales, en aras de garantizar al máximo los derechos fundamentales de los asociados, pues contempló el legislador secundario en la reglamentación de la acción de tutela, que quienes ponen en marcha el aparato judicial son seres humanos, susceptibles de cometer errores, entonces de esta manera se blindaban derechos fundamentales que quedaban solo dentro de la órbita de protección de aquel funcionario encargado de administrar justicia.

La situación mentada que fue descartada por la H. Corte Constitucional (SENTENCIA T - 543, 1992), al considerar que con este fenómeno constitucional se daba paso a debatir nuevamente litigios que ya hacían tránsito a cosa juzgada,

guardando esto consonancia con los principios de cosa juzgada, legalidad y seguridad jurídica, así mismo dispuso el cierre de jurisdicción constitucional que debía aplicarse una formula igual a los actos o actuaciones administrativas, pero bajo la condición que estos se presumen legales, y por ende el ordenamiento jurídico dispone de otros mecanismos judiciales ordinarios para la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados.

Sin embargo, en su despliegue doctrinario la jurisprudencia de la Corte Constitucional, abrió caminos para la procedencia de la Tutela contra providencia judicial y contra actos administrativos, señalando circunstancias específicas que permiten de manera extraordinaria el estudio de la procedencia de la acción de tutela de manera definitiva o transitoria, en aras de poder efectivizar su alcance en amparo de los derechos fundamentales, pues ha evitado con esto que ritualismos procesales, estén por encima de los derechos fundamentales inherentes de los colombianos.

La acción de tutela contra actos y actuaciones administrativas y providencias judiciales

I. INTRODUCCIÓN

Con la constitución de 1991, en Colombia nació el Estado Social y Democrático de Derecho, cambiando el paradigma de la justicia en Colombia en la protección efectiva de los derechos fundamentales de los colombianos.

Dando paso entonces dentro del ordenamiento legal colombiano, a la acción pública de tutela que aparece como un mecanismo, cuyo fin es el de amparar de manera efectiva los derechos fundamentales cuando no existe otra vía legal para hacerlo o cuando aun existiendo una, esta resulta inocua y por consiguiente se amenazan o vulneran los mismos.

Es de resaltar que la acción de tutela contra providencias judiciales y contra actos y actuaciones administrativas en un mecanismo excepcional que, sin asomo de duda, en la actualidad permite enmendar errores que la administración de justicia y la administración ejecutiva cometen, generando vulneración de los derechos fundamentales de los colombianos.

Por ende, nos enfocamos en sintetizar y establecer de manera expresa las causales por las cuales procede la acción de tutela contra una providencia judicial y contra actos y actuaciones administrativas, a través del análisis documental de la doctrina y la jurisprudencia nacional, cuyo fin es el de alcanzar un derrotero exacto que sirve de guía para la protección de derechos fundamentales en los eventos mentados.

II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación realizada para la elaboración de este documento es de tipo explicativa, pues mediante esta, se determinan las causales excepcionales de la procedencia de acción de tutela contra providencia judicial, actos y actuaciones administrativas, así como la eficacia que tiene esta para proteger los derechos fundamentales en Colombia, cuando se presenta un error de hecho o de derecho en estas decisiones.

Por su parte, el diseño de investigación y la recopilación de la información, es de carácter documental, pues los resultados de la misma provienen del análisis de documentos en libros, tesis, páginas web, jurisprudencia, artículos, entre otros tipos de documentos y cualquier otro tipo de información.

En primeras oportunidades, la Corte Constitucional, estableció que la acción de tutela no es procedente contra providencias judiciales, actuaciones y actos administrativos, con el fin de no afectar los principios de cosa juzgada, la autonomía judicial, la seguridad jurídica, la independencia de poderes, entre otros; pero a partir del año 2005 estableció que este mecanismo público de protección constitucional, también puede ser utilizado de manera excepcional contra decisiones que sean contrarias a lo determinado en el ordenamiento jurídico, debido a errores de hecho y de derecho, protegiendo de esta manera los derechos fundamentales de los ciudadanos dentro de las actuaciones proferidas por la administración de justicia y el área ejecutiva.

La acción de tutela contra providencia judicial

La acción de tutela contra providencia judicial, nace con el decreto 2591 de 1991, pero esta disposición del presidente de la época, fue declarada inexecutable por la Corte Constitucional mediante sentencia (C-543, 1992) por atentar contra el principio de cosa juzgada. En (Sentencia C-594, 1992). nace otro fenómeno de cosa juzgada Constitucional, determinando que la misma puede ser formal o material, fenómenos no analizados a fondo por los suscritos.

Sin embargo tenemos que en ese mismo análisis, el cierre de jurisdicción Constitucional, abrió una pequeña puerta señalando que efectivamente el operador judicial en sus decisiones podría incurrir en situaciones de hecho y con esto vulnerar derechos fundamentales de quienes accedían a las vías judiciales, pero todo quedo en ese momento en solo un enunciado sin fuerza vinculante, manteniendo que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo o una instancia pos procesal para debatir situaciones que debían surtirse dentro del procedimiento propio de cada caso.

Con el transcurrir dogmático de la Corte Constitucional, se fue abriendo la posibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial por vías de hecho y finalmente las determinó mediante la sentencia C-590 de 2005 (sentencia C-590 , 2005), señalando en esa oportunidad que los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela (ahí la importancia de entender cómo opera la cosa juzgada constitucional); el organismo de cierre constitucional consolidó su jurisprudencia, debido a la necesidad social, mencionando que efectivamente la tutela podía ser utilizada contra decisiones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico, señalando **(i) Requisitos generales (ii) Requisitos especiales y (iii) Causales genéricas de procedibilidad.**

La Corte Constitucional trazó los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia

constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (Sentencia T 173, 1993) En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

(Sentencia T- 504, 2000) De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (Sentencia T-315, 2005). De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora

(Sentencias T-008/98 y SU-159/2000). No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (Sentencia T-658, 1998). Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela (Sentencias T-088-99 y SU-1219-01). Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

Pero también establece el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, que además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, los cuales deben quedar

plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la doctrina de la máxima Corte de protección de derechos fundamentales, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explicaran.

a. **Defecto orgánico**, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. **Defecto procedimental absoluto**, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. **Defecto fáctico**, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. **Defecto material o sustantivo**, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales (Sentencia T-522, 2001) o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. **Error inducido**, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. **Decisión sin motivación**, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. **Desconocimiento del precedente**, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos

casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado (Sentencias T-462, 2003).

h. Violación directa de la Constitución. Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.” (Sentencia C-590, 2005).

Así las cosas, es claro que la Corte Constitucional sistematizó los parámetros por los cuales se puede presentar acción de tutela contra providencia judicial, valga la reiteración: Primero, requisitos generales que se deben cumplir a cabalidad y son los que habilitan el estudio constitucional y segundo el cumplimiento una de las causales especiales de procedibilidad, con el fin máximo de garantizar los derechos fundamentales de quienes acceden a la justicia.

Es de acotar que en el acontecer de las tutelas contra providencias judiciales, generaron un conflicto de poder o llamado en el adagio popular “choque de trenes” entre las altas cortes, pues a pesar que de acuerdo a su especialidad todas están en la misma jerarquía, la Corte Constitucional subió un peldaño, utilizando la tutela, revocando indistintamente los fallos de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que en aras de aminorar esta decisión, la Corte Constitucional mediante sentencia (SENTENCIA SU-917, 2010), agregó un requisito especial a la procedencia de las acciones de tutela contra fallos de las altas cortes y al respecto dijo:

“la tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la

jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.

A continuación, se señalan ejemplos de acciones de tutela que han prosperado contra providencia judicial, los cuales hemos seleccionado, para dar a entender con mayor precisión los defectos que ocurren dentro de las providencias judiciales y que pueden ser saneados a través de la acción pública de tutela.

Sentencia T-006/18.

Situación fáctica. Una menor viaja con su madre a Colombia con autorización del padre desde Argentina. La madre de la menor faltándole un día para cumplirse la fecha de retorno solicita al ICBF apoyo para no regresar por problemas de violencia intrafamiliar. Se inicia un proceso de restitución internacional de menores, incoado por una Defensora de Familia a solicitud de contra la madre de la menor que solicitaba reclamaban la permanencia en Colombia, pues ya en estudios del ICBF se había podido determinar que el entorno familiar en el que se desenvolvía la menor en Argentina no era el adecuado. El juzgado cuarto de familia de Ibagué – Tolima, quien conoció del proceso en primera instancia, fallo a favor de la madre y en segunda instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué revocó la decisión y ordenó el reintegro inmediato de la niña, por lo que la madre y la defensora de familia del ICBF, presentaron acciones de tutela, indicando que el derecho fundamental al debido proceso de la menor había sido vulnerado, argumentando la configuración de un defecto fáctico por la falta de valoración integral del acervo probatorio y que

no se tuvo en cuenta la calidad de sujeto de especial protección y que el interés superior del menor no fue analizado. Las acciones de tutela fueron acumuladas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual revocó la sentencia de segunda instancia y dejó en firme la de primera instancia y en la impugnación ordenando la permanencia de la niña en la república de Colombia.

Causal de procedibilidad de acción de tutela. Defecto fáctico

Ratio decidendi. “la etapa probatoria es un componente fundamental para que el juez cuente con la certeza y convicción sobre la ocurrencia o no de los hechos que se alegan en cada instancia judicial, y con base en la cual resolverá la controversia planteada, llegando a una solución jurídica, sustentada en elementos de juicio sólidos” (T-006 , 2018). Esta decisión la tomó la Corte Suprema de Justicia porque en la segunda instancia no se tuvo en cuenta el acervo probatorio aportado.

Resuelve. Confirmar la decisión tomada por la sala civil de la Corte Suprema de Justicia

Sentencia T-534 de 2015

Situación fáctica. Una mujer presenta demanda ordinaria laboral para reconocimiento de pensión de vejez contra el que el Instituto de Seguros Sociales ISS, conociendo el juzgado séptimo laboral del circuito de Barranquilla, quien concedió las pretensiones adjudicándole la pensión más los intereses moratorios y los incrementos respectivos adicionales.

Ninguna de las partes presentó apelación y la decisión se sometió grado jurisdiccional de consulta conociendo la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla confirman del reconocimiento pensional, pero modificó la acusación de los intereses y IBL dejándolo en un monto más alto que en primera instancia.

A causa de esta decisión. La actora solicitó al ISS el cumplimiento de esa sentencia, pero la entidad nunca respondió y se presentó un silencio administrativo.

Nuevamente la accionante presentó demanda ordinaria laboral, conocida por el juzgado segundo laboral del circuito de Barranquilla, quien ordenó al ISS liquidar la pensión de vejez de la demandante. En este proceso se presenta apelación y el Tribunal Superior De Barranquilla revocó la decisión de primera instancia, al estimar que se configuró cosa juzgada en la sentencia del primer proceso donde se le reconoció por primera vez la pensión.

Ante este fallo, la demandante instauró acción de tutela contra la sentencia de segunda instancia del segundo proceso, considerando vulnerados los derechos al debido proceso y seguridad social al incurrir en defecto sustantivo por indebida interpretación pues la autoridad judicial demandada revocó la decisión de primera instancia y declaró excepción de cosa juzgada.

En el trámite de la acción de tutela, conoció en primera instancia la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien declaró improcedente la acción y la Sala Penal de la misma corte ratificó en segunda instancia.

Causal de procedibilidad de la acción: Defecto sustantivo.

Ratio decidendi. “Una autoridad judicial vulnera los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y al debido proceso de una persona de 60 años de edad, al declarar la cosa juzgada de la pretensión de la reliquidación del monto de la pensión de vejez con fundamento en que esa petición se estudió en el proceso que reconoció esa prestación en ejercicio del grado jurisdiccional consulta. Lo anterior, porque el juez unipersonal o colegiado incurre en defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 332 del

Código de Procedimiento Civil, cuando identifica la causa petendi de los procesos con las pruebas de los mismos y confunde el objeto de la pretensión de reliquidación pensional con la súplica del reconocimiento de la prestación de vejez. Adicionalmente, esa hermenéutica significa que la pretensión del aumento del monto de la pensión nunca sea estudiada de manera directa por los jueces, escenario que supone una afectación desproporcionada de los derechos de los accionantes.” (T-534, 2015)

Resuelve. La Corte Constitucional, revocó las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por dos salas de la Corte Suprema de Justicia además de dejar sin efecto el fallo de segunda instancia que profirió el Tribunal Superior de Barranquilla y que dio origen a la acción de tutela.

Sentencia T-271/2015

Situación fáctica. Una persona jurídica fue condenada por un juzgado de Sogamoso al pago una multa de 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 3 días de arresto para su representante legal por un incidente de desacato de una acción de tutela.

La acción de tutela fue presentada por varios ex trabajadores de la empresa invocando la protección del derecho de petición y solicitando el reconocimiento de la actualización de sus mesadas pensionales. El proceso fue conocido por el juzgado primero civil municipal de Sogamoso y concedió el amparo de los ex trabajadores, sin embargo, estos últimos presentaron incidente de desacato en contra de la empresa, pero esta, dentro del término procesal, manifestó haber acatado el fallo de tutela y anexó las correspondientes liquidaciones pensionales. Sin embargo, casi 2 meses después, el juez decidió dar trámite incidental a la solicitud presentada por los peticionarios y falló en contra de la empresa imponiéndole la sanción anteriormente mencionada por las siguientes razones a su juicio: 1.No dio contestación en debida forma los derechos de petición elevados

por los peticionarios y 2. No realizó la indexación de la primera mesada pensional a la totalidad de los ex trabajadores de la empresa. Esta decisión fue a consulta ante el juzgado primero Civil del circuito de Sogamoso y este confirma la decisión en primera instancia.

La empresa interpone acción de tutela contra las providencias de ambos juzgados, manifestando la violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, principio de legalidad, prevalencia del derecho sustancial y acceso a la administración de justicia , aduciendo como causales de procedibilidad: defecto sustancial, defecto procedimental y defecto fáctico.

En primera instancia declararon improcedente la acción de tutela, y en la impugnación de la misma la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión en primera instancia.

Causales de procedibilidad de la acción de tutela. Defecto sustancial, defecto procedimental y defecto fáctico.

Ratio decidendi.

En esta acción de tutela, se puede observar, que si bien la acción de tutela contra providencia judicial no se aplica para las sentencias de tutela, si es procedente contra un incidente de desacato diciendo la Corte Constitucional “*en varias oportunidades ha reconocido esta corporación que, excepcionalmente, es posible cuestionar, mediante el uso de la acción de tutela, la decisión del incidente de desacato que hubiere sido promovido por el actor de otra acción de tutela previamente tramitada, posibilidad que, según lo antes explicado, está abierta tanto a la persona que hubiere resultado sancionada al término de dicho incidente, como al demandante que solicitó la apertura de aquél*” (Sentencia T-014, 2009), esto principalmente cuando se trata de violación de derechos fundamentales especialmente el del debido proceso.

Acciones de tutela contra actos y actuaciones administrativas.

Por regla general, la acción de tutela es improcedente contra actos y actuaciones administrativas, teniendo en cuenta que dicha acción es de carácter subsidiario y que mediante vía ordinaria en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se puede anular un acto y por consiguiente dejarlo sin efectos.

No obstante, la Corte Constitucional, ha establecido que con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas, al momento de determinar la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos, no es suficiente determinar si se cuenta o no con otro mecanismo judicial, sino que además se debe estudiar si dicho mecanismo es idóneo y eficaz y si se está frente a la ocurrencia de un perjuicio irremediable frente a derechos fundamentales. (SENTENCIA T-589, 2011) (SENTENCIA T-590, 2011)

La idoneidad del mecanismo judicial. Se refiere a la aptitud material del mecanismo judicial para producir la protección de los derechos fundamentales, lo que se presenta cuando el medio de defensa es correspondiente con el contenido del derecho, es decir que la acción ordinaria es la pertinente y el camino adecuado hacia el derecho que se pretende proteger

La eficacia del mecanismo judicial. Tiene que ver con el hecho de que un mecanismo esté diseñado de tal manera que garantice de manera integral y oportuna los derechos amenazados o vulnerados a las personas por una acción u omisión de una autoridad pública o personas que ejerzan funciones públicas.

Para determinar la concurrencia de estas dos características del mecanismo judicial ordinario, la corte ha establecido que se deben analizar entre otros los siguientes aspectos:

1. Los hechos de cada caso.

2. Si la utilización del medio de defensa judicial ofrece la misma protección que se proporciona la acción de tutela.
3. Si el tiempo que se toma en la decisión de la controversia ante la jurisdicción ordinaria imposibilita el ejercicio del derecho fundamental durante el trámite.
4. La existencia de medios procesales mediante los cuales se puedan exponer los argumentos relacionados con la protección de los derechos fundamentales.
5. Las circunstancias por las cuales el interesado no haya promovido o no espere promover los mecanismos ordinarios.
6. La condición de sujeto de especial protección constitucional. (SENTENCIA T-161, 2017)

Mediante jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido diferentes criterios en el tema de la procedencia de acción de tutela:

1. De manera directa
2. de manera transitoria

Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de manera directa.

Respecto a este caso, la Corte Constitucional ha señalado que para la procedencia de acción de tutela contra actos y actuaciones administrativas tanto de carácter particular como general se deben estudiar cada uno de los casos en concreto, para esto la Corte Constitucional ha dispuesto:

“pese a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial como el medio de control de la nulidad y restablecimiento del derecho, se deben analizar las condiciones de eficacia material y las circunstancias especiales de quien invoca el amparo, que pueden hacer viable la protección de los derechos del afectado a través de la acción de tutela de forma definitiva.”

Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de manera transitoria.

La Corte Constitucional ha establecido que adicionalmente a la eficacia e idoneidad del mecanismo judicial diferente a la acción de tutela, es necesario que se presente un perjuicio irremediable, lo que permite la viabilidad de la acción de tutela como mecanismo transitorio hasta que la jurisdicción ordinaria defina el problema jurídico (SENTENCIA T-086, 2012). Sin embargo, para que esta protección sea efectiva y perdure en el tiempo, es necesario que el accionante presente la acción ordinaria pertinente dentro de los 4 meses después del fallo de la acción de tutela, so pena de la pérdida de vigencia del amparo logrado por la vía tutela.

Para la procedencia de la acción de tutela contra actos o actuaciones administrativas como mecanismo transitorio, sobre el accionante recae la carga probatoria que le permita al juez, sin duda alguna, determinar la existencia real e inminente de la consumación de un perjuicio irremediable en caso de no ser tutelados los derechos por esta vía especial.

En este tema la jurisprudencia constitucional ha decantado los elementos que deben concurrir en el acaecimiento de un perjuicio irremediable:

- A. Que se esté ante un perjuicio **inminente** o próximo a suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño.
- B. el perjuicio debe ser **grave**, esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona.

C. se requieran de medidas **urgentes** para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso.

D. las medidas de protección deben ser **impostergables**, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.” (SENTENCIA T-816, 2006)

Adicional a esto, la Corte Constitucional, ha establecido que, en el caso de la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio en actos y acciones administrativas de carácter particular, se tendrá en cuenta criterios como:

(I) la edad de la persona.

(II) ser sujeto de especial protección en el caso de las personas de la tercera edad.

(III) el estado de salud del solicitante y su familia.

(IV) las condiciones económicas del peticionario del amparo.

Condicionando el máximo tribunal que además se haya desplegado cierta actividad procesal administrativa por parte del interesado. (SENTENCIA T-881, 2010)

CONCLUSIONES

Colombia como Estado Social y Democrático de derecho, tal como lo pregonan la Constitución Política tiene como fin “*servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución*” y la acción de tutela, es una herramienta instituida precisamente para lograr estos objetivos, institución que efectivamente

ha logrado avances en la protección de derechos fundamentales amenazados y vulnerados.

La procedencia de la acción de Tutela contra providencias judiciales como contra actos y actuaciones administrativas, es la fehaciente e irrefutable prueba de que los derechos fundamentales están por encima de la objetivación de las normas, al respecto debemos reconocer el arduo y loable trabajo que la Corte Constitucional vía jurisprudencial ha dispuesto, pues ha señalado una serie de requisitos, para evitar que las decisiones de quienes administran pasen las fronteras del ordenamiento jurídico, ubicando la acción de tutela como un contrapeso a estas decisiones, siendo esta institución jurídica un mecanismo excepcionalísimo, que sirve de puente para que el ciudadano pueda detener el peso agobiante de la posición dominante del estado; así mismo ahora el estado no solo tiene un papel de regulación de derechos fundamentales sino de una protección efectiva de los mismos.

Sin duda alguna la acción de Tutela contra providencias judiciales como contra actos y actuaciones administrativas, es una herramienta eficaz, que permite en tiempo real, de manera eficiente amparar derechos fundamentales que son vulneradas por autoridades judiciales y administrativas, que, de perder su vigencia y aplicación, quienes administran tuvieran un poder desbordante en sus manos, pues el ciudadano no podría hacer un control social y legal a sus decisiones.

Como anota Pietro Sanchìs “La especial posición que ocupa los derechos fundamentales en el Estado Constitucional se manifiestan un reforzamiento de sus garantías o de su resistencia jurídica frente eventuales lesiones originadas en la actuación de los poderes públicos” (PIETRO SANCHIZ, 2009).

Bibliografía

Accion Pública de Tutela.
C-543 (CORTE CONSTITUCIONAL 1992).
Constitucion Nacional, articulo 86.
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, ART 86 (1991).
Declaracion Universal de Derechos Humanos (ONU 1948).
Decreto Reglamentario de la Accion de TUTELA 2591 (1991).
PIETRO SANCHIZ, L. (2009). *Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales*.
Madrid, España: Trotta.
sentencia C-590 (Corte Constitucional Colombiana 2005).
Sentencia C-590 (Corte Constitucional Colombiana 2005).
Sentencia C-594 (Corte Constitucional Colombiana 1992).
SENTENCIA SU-917 (CORTE CONSTITUCIONAL 2010).
SENTENCIA T - 543 (CORTE CONSTITUCIONAL 1992).
Sentencia T 173 (Corte Constitucional Colombiana 1993).
Sentencia T- 504 (2000).
Sentencia T-014 (Corte Constitucional 2009).
SENTENCIA T-086 (CORTE CONSTITUCIONAL 2012).
SENTENCIA T-161 (CORTE CONSTITUCIONAL 2017).
Sentencia T-315 (Corte Constitucional Colombiana 2005).
Sentencia T-522 (Corte Constitucional Colombiana 2001).
SENTENCIA T-589 (CORTE CONSTITUCIONAL 2011).
SENTENCIA T-590 (CORTE CONSTITUCIONAL 2011).
Sentencia T-658 (Corte Constitucional Colombiana 1998).
SENTENCIA T-816 (CORTE CONSTITUCIONAL 2006).
SENTENCIA T-881 (CORTE CONSTITUCIONAL 2010).
Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 (Corte Constitucional Colombiana).
Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 (Corte Constitucional Colombiana.).
Sentencias T-462 (Corte Constitucional Colombiana 2003).
T-006 (Corte Constitucional 2018).
T-534 (Corte Constitucional Colombiana 2015).